

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, la senda de que formaba parte el puente en cuestion y este mismo, sirven y han servido para el tránsito del público.

Considerando: que entro las facultades de los Ayuntamientos, se ha enumerado siempre la de dietar todas las providencias oportunas y necesarias, para que no se estorbe ni se impida el libre uso de las vias de comunicacion de sus respectivos municipios.

Considerando: que por lo mismo, la providencia del Ayuntamiento de Cuautitlan, ha sido dictada con causa legal y por autoridad competente.

Considerando: que no es de la competencia de los Tribunales federales, y menos por medio de este recurso, examinar y decidir las controversias sobre propiedad y posesion que se susciten entre las autoridades, representando los intereses públicos y los particulares sujetos á su jurisdiccion, por cuyo motivo, los derechos de propiedad y posesion del puente que alegan los quejosos, deben hacerlos valer ante la autoridad judicial respectiva.

Considerando: que la multa impuesta á Ortiz y á la Ramos, lo ha sido igualmente por autoridad competente y dentro del máximo hasta el cual pueden imponer esta pena las autoridades administrativas, conforme al artículo 21 de la Constitucion.

Considerando: que Gregorio, Manuel y Guadalupe Santillan así como Cleofas Ramos, no han tenido representacion legal en este recurso.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 30 de Junio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Pedro Prisco Ortiz y á D^a Faustina Ramos, contra la providencia dictada por el Ayuntamiento de Cuautitlan, por la cual

se mandó reponer el puente que habian destruido, y se les impuso una multa por este hecho.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 17 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por D. Cándido Ramos, contra el acto del C. Alcalde 1º de Tampico, en un interdicto de obra nueva, intentado por D. Ramon Obregon contra el quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En vista de las pruebas presentadas por D. Cándido Ramos en este juicio, parece no quedar duda alguna de que el Código de procedimientos civiles no ha sido debidamente promulgado en esta Ciudad, no obstante existir un decreto del Congreso del Estado que lo adoptó en él, haciéndole varias reformas.

Ese decreto que es el número 58, ha llegado á noticia del que suscribe, por haberlo visto copiado en el número 132 del "Foro" periódico de México. En el periódico de esta Ciudad, no ha salido. Además, aún cuando hubiera salido, el solo no podría ob-

servarse sin el Código que declara vigente, y es un hecho que este no ha tenido la necesaria publicacion; lo cual ha impedido sin embargo, que de algun tiempo acá se esté aplicando en los Juzgados locales.

Pero para el objeto de este juicio de amparo, que no versa sobre si se está ó no observando dicho Código, sino sobre si esta observancia es ó no la legal, lo cual depende de que haya sido ó no publicado con la competente solemnidad, es indudable, en concepto del suscrito, que el actor ha probado superabundantemente, que no hubo tal publicacion; así lo dicen las autoridades municipales y judiciales, cuyos oficios constan en el cuaderno de pruebas, con escepcion del C. Juez de 1ª instancia, que en el suyo, examinándolo despacio, pues las tres respuestas que dá en su parte final, mas bien que respuestas, son una especie de evaciones á las preguntas.

Por lo mismo, la impresion que inevitablemente queda en el ánimo despues de leer ese cuaderno de pruebas, es como ya dijo el fiscal, que el Código de procedimientos del Distrito Federal y Baja California, no ha sido publicado oficialmente en esta Ciudad, lo que equivale á no haber sido promulgado, y esto á que no debe observarse.

Y no debiendo observarse, la consecuencia precisa es, que hay una evidente violacion de garantías para el individuo á quien á su pesar se le aplica, supuesto que tal aplicacion no es la de una ley "exactamente aplicable" y "dada con anterioridad" que son las palabras de que usa la Constitucion general en su artículo 14.

Eso es lo que ha sucedido en el caso sobre que versa este expediente, con motivo de una cuestion sobre servidumbre entre D. Cándido Ramos y D. Ramon Obregon, la autoridad local empezó á aplicar el Código de procedimientos citado. Pero despues que se convenció de lo contrario, lo hizo notar al Juzgado, al tiempo de contestar una notificacion, é insistió en la peticion que ya antes habia hecho, de que se revocara por

contrario imperio un auto en que se lo declaraba parte en aquel juicio.

A pesar de todo, la autoridad local llevó adelante sus providencias, fundándose siempre en el repetido Código, y entonces el Sr. Ramos pidió amparo. Esto, segun lo que queda dicho antes, debe concederse.

El fiscal cree inútil examinar si la cuestion entre D. C. Ramos y D. R. Obregon, es judicial, porque en su opinion está claro que no lo es, una vez demostrado que cierta ley conforme á la cual se está siguiendo un negocio, no ha sido publicada, (lo que equivale á demostrar que no es ley); el negocio relativo no puede decirse que es judicial sólo porque un Juez lo tramite.

Si esto fuera, la autoridad judicial podría cometer mil violaciones de garantías, sin que nunca hubiese lugar á amparo contra ellas, sin embargo de que estuviese siguiendo un asunto conforme á una ley extranjerá: v. gr. ó á una ley derogada, ó á una no publicada todavia.

En este punto, como en otros varios que se rozan con la ley de amparo, no hay aun reglas fijas á que atenderse; pero el sentido comun dice, que una de estas reglas ha de ser que se considere negocio judicial, aquel en que el C. Juez esté sugetándose á la ley del país.

En el caso presente, no es sugetarse á la ley del país; sino antes bien quebrantarla en uno de sus principales preceptos, el hecho de administrar justicia conforme á un Código que carece del esencial requisito de la publicacion. Por lo mismo, el negocio en que tal cosa se hace, no puede llamarse judicial.

En virtud de todo lo expuesto, el fiscal, no obstante su peticion anterior, cree que debe pedir al Juzgado, que conceda el amparo solicitado por D. Cándido Ramos contra todos los actos que en su negocio con D. Ramon Obregon ha ejecutado el C. Alcalde 1º de esta Ciudad conformándose al Código de procedimientos del Distrito federal y Baja California.

Tampico, 3 de Julio de 1874.—*Lic. Manuel Ortiz.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Tampico, 6 de Julio de 1874.—Visto el presente juicio de protección y amparo de garantías, promovido por D. Cándido Ramos, contra el acto del C. Alcalde 1º que conoce por recusación del Juez letrado, en un interdicto de obra nueva intentado por D. Ramon Obregon contra el quejoso, obligándolo dicha autoridad á sugetarse al decreto del Estado número 58, de 27 de Mayo de 1873 y al Código de procedimientos civiles del Distrito federal, puesto en vigor por el citado decreto, por reputar que tal acto es contrario á las prescripciones contenidas en los artículos 8 y 9 de la Constitución del Estado, al 126 de la general, y que viola en la persona del quejoso, la garantía otorgada al hombre en el artículo 14 de la repetida Constitución federal, supuesta la falta de publicación de otras leyes. Vistos: el informe y justificantes remitidos por la autoridad ejecutora del acto reclamado; las pruebas rendidas por el promovente y su extenso alegato; los pedimentos del C. Promotor fiscal y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que la ley no es obligatoria, mientras no ha sido debidamente promulgada, ley 12, tít. 2º lib. 3º Nov. Rec. y así lo previno de una manera terminante el artículo 42 de la 3ª ley constitucional, sin que pueda objetarse en contrario, la circunstancia de tenerse de antemano conocimiento de ella: Escríbele Dic. de Leg. "promulgación"; que en el Estado de Tampico, tal principio ha sido implícitamente reconocido en el artículo 77 de la Constitución particular; que el artículo 92 citado, como el 90, por el interesado, exige que los procedimientos judiciales sean arreglados por las leyes, y no tienen el carácter de tales las que carecen del indispensable requisito de la promulgación.

Considerando: que de autos consta superabundantemente probada la falta de promulgación en esta Ciudad, del Código de procedimientos civiles del Distrito federal y decreto número 58 que lo declaró vigente, siendo digno de atención, el atestado del C. Presidente del R. Ayuntamiento, por ser la autoridad llamada por la ley para hacer la publicación de las disposiciones legislativas: que está igualmente probada la irregularidad con que se ha publicado el periódico oficial, su falta de circulación, y la omisión en sus columnas, del decreto número 58 y Código por él puesto en vigor.

Por tales consideraciones, con fundamento de las disposiciones citadas y de las aducidas por el C. Promotor en su último pedimento, definitivamente juzgando, fallo: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Cándido Ramos, contra las providencias del C. Alcalde 1º, que lo obligan á sugetarse en el interdicto de obra nueva seguido en su contra por D. Ramon Obregon, al decreto número 58 del Estado, y sustanciación del Código de procedimientos del Distrito. Notifíquese; y sacadas para su publicación las copias de estilo, elévense estos autos á la Suprema Corte.

El C. J. José Manuel Jáuregui, Juez interino de Distrito del Estado, así lo decretó, mandó y firmó, lo que testificamos.—*Lic. José M. Jáuregui.—Rafael Zaleta.—Guillermo Prieto.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 17 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito situado en Tampico, por D. Cándido Ramos, contra los procedimientos del Alcalde 1º de la misma Ciudad, en el interdicto de obra nueva que tiene intentado contra el quejoso D. Ramon Obregon, por normar dicha autoridad, la sustanciación del juicio, al Código de procedimientos ci-

viles del Distrito federal, con violacion de las garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución de la República, en virtud de no haberse promulgado en el mencionado puerto, ni el decreto de fecha 27 de Mayo del año pasado, que ordenó la observancia del expresado Código, ni tampoco este mismo, y considerando:

Que conforme al artículo 14 de la Constitución de la República, nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho.

Que por las pruebas rendidas por el quejoso, aparece plenamente justificada la falta de promulgacion en Tampico, del Código de procedimientos civiles del Distrito federal, y del decreto de 27 de Mayo del año próximo pasado que dispuso se observara en el Estado.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 14, 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 6 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Cándido Ramos, contra los procedimientos del Alcalde 1º de Tampico, en el interdicto de obra nueva que le tiene promovido D. Ramon Obregon, en cuanto en ellos se ha aplicado el Código de procedimientos civiles del Distrito federal y territorio de la Baja California.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—Miguel Auza.—José M. Lozano.—José María Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio María Altamirano.—Simón Guzmán.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

TOMO VI.—PARTE II.

Es copia que certifico. México, 4 de Setiembre de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo Pankhurst, en representacion de Don Oscar Lorentzen, D. Felipe, D. José P., D. Santiago Villanueva y Don Manuel Dargui, contra la Administracion principal de rentas de la Capital de ese Estado, que les exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda, que por ministerio de la ley desempeña la promotoria fiscal, manifiesta: que el ocurso presentado por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst en representacion de varios comerciantes de esta Capital, pidiendo por lo pronto la suspension del cobro del uno por ciento que pretende la administracion de rentas del Estado, en virtud de la ley de la Legislatura, de 19 de Mayo del año próximo pasado, está fundado en el artículo 72 de la Constitución general vigente, que prohíbe á los Estados gravar la exportacion de metales, y por cuyo fundamento, el Juzgado dispuso de conformidad con lo pedido del acto reclamado de suspension, dictando además los trámites que previene la ley de 20 de Enero de 1869.

Al evacuar la administracion de rentas el informe respectivo, expone: que no estando derogada la indicada ley del Estado, y habiendo dado las razones en otros juicios de igual naturaleza, sus antecesoros, se refiere á ellos. Desconociendo el que suscribe esas razones, pero teniendo presente los conside-